

CRISIS HUMANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS Y CUESTIÓN SOCIAL: UNA MIRADA INTERNACIONAL

J. Eduardo López Ahumada

El colapso de la economía y sus efectos sociales

Las consecuencias de la pandemia han paralizado la actividad económica y sus efectos son especialmente visibles en el trabajo de las personas. Es preciso destacar que la crisis del coronavirus ha venido a poner en cuestión nuestro modelo de economía, muchas veces insensible con los aspectos sociales y éticos ligados al trabajo de las personas. La crisis del Covid-19 va a transformar nuestro modelo de convivencia social y las bases de nuestro Estado del Bienestar. Estamos viendo como las respuestas de los estados son dispares ante un desafío global, que se traduce en una pandemia histórica, como consecuencia de la rápida e intensa propagación del virus que nos está afectando. Sin duda, se trata de una situación incierta, que nadie previó en su momento, y que estamos intentados asimilar, dando respuestas desde la perspectiva de la soberanía de los estados nacionales.

Desde el punto de vista económico, la situación nos remite a un contexto actual adverso y a un futuro sumamente incierto. Las consecuencias futuras de la crisis van a ser profundas y tendrán un alto coste, dada las consecuencias y la magnitud de la epidemia que está sobrepasando las predicciones iniciales. La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que la globalización no ha funcionado y que es preciso reformular su acción en un mundo global. Ello requiere un nuevo papel proactivo de los estados nacionales y una mayor coordinación de la acción institucional de los organismos internacionales. Por tanto, la respuesta no debe ser reactiva, sino proactiva. Por otro lado, la actual crisis global necesita asimismo de la ayuda de los mercados. Dichos mercados tienen ahora que ser solidarios, sobre todo, desde el punto de vista de la ayuda y la promoción del crédito a los estados y al propio sistema económico.

La necesidad del consenso y de la solidaridad en la Unión Europea

La actual crisis ha evidenciado, desde el punto de vista europeo, la necesidad de lograr mayor entendimiento, colaboración y solidaridad de la Unión Europea con los países más afectados por la crisis sanitaria, cuyas economías se están resintiendo con más intensidad a causa del coronavirus. Es cierto que la Unión Europea no tiene una competencia soberana en materia de salud pública, ya que su función es de coordinación de los distintos sistemas sanitarios. Con todo, no cabe duda de que las críticas contra la Unión Europea son evidentes, y los estados más afectados, como Italia y España, no han dudado en pedir ayuda e insistir en la solidaridad y en la coordinación desde el punto de vista del proyecto europeo de integración.

Evidentemente, las medidas a adoptar van mucho más allá del estricto ámbito sanitario. El apoyo de la Unión Europea consiste en fortalecer la respuesta social a la pandemia. Ello significa establecer fondos sociales especiales para hacer frente al incremento sobrevenido de las prestaciones sociales, así como ayudas al sistema económico. En el ámbito europeo se ha hablado de la puesta en marcha de un plan Marshall adaptado en el contexto actual a los países de la Unión Europea. Precisamente para garantizar los salarios y las prestaciones sociales básicas para los trabajadores y los desempleados.

El especial impacto de la crisis global en América Latina y el aumento de las situaciones de exclusión social

La situación actual supone una crisis de salud global, acompañada de la tan temida crisis económica, con un impacto que hasta ahora no hemos visto. En esta situación la enfermedad va a ser letal ante las capas de la sociedad excluida del sistema de salud. Ello afecta a los colectivos más vulnerables, que no cuentan con una cobertura pública de salud universal. Por ello, es cada vez más importante la presencia del estado nacional en estos momentos, reafirmando la debida protección de la salud de los ciudadanos. Sin duda, esta situación va a reafirmar mucho más los grandes desafíos de la igualdad y la justicia social en la región, observando cómo afecta la enfermedad a los colectivos informales, al indigenismo, a las familias numerosas, a los ancianos, etc.

En general, esta situación de emergencia sanitaria afecta a todos aquellos que se encuentran sin acceso material posible a los servicios de salud. Todo ello es un gran reto, que va a poner en cuestión el verdadero papel de los estados en la región y ello ante el gran desafío de superar el intenso modelo de desarrollo introducido por los postulados del individualismo neoliberal. En América Latina el gasto social asciende a la media del 20 por 100 del producto interior bruto de la región. Con todo, la situación de alarma sanitaria está obligando a todos los Estados a optar por la senda de los subsidios para los segmentos más vulnerables de la población, con medidas sin precedentes en Latinoamérica. Estas son decisiones que iremos viendo si son o no suficientes, así como si hará falta extenderlas, tanto desde el punto de vista de la protección, como de los colectivos afectados. Estamos, pues, ante un nuevo reto que demanda más protección y bienestar social.

El papel de las políticas laborales y sociales como mecanismos de compensación social

En esta situación es ciertamente importante recurrir a las acciones desarrolladas por la OIT. Ciertamente la OIT tiene un especial rol en esta situación de urgencia y dispone de instrumentos para desarrollar adecuadas políticas laborales y sociales de combate a la pandemia. Con carácter general, tenemos los instrumentos internacionales básicos, Convenios y Recomendaciones, que marcan un importante camino a seguir en cuanto al trabajo digno y la justicia social, así como el recurso a los códigos de conducta, guías y manuales de interpretación de los estándares laborales internacionales. Precisamente

ahora, en esta situación de emergencia, la OIT debe focalizar su acción en dar respuestas e índices de tratamiento de una situación ciertamente compleja.

En este ámbito se requieren medidas necesarias de política económica y social, que se canalizan obviamente mediante las reglas nacionales del trabajo. Sin duda, se muestra la importante función del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como sector del ordenamiento jurídico más sensible con la realidad social. Las normas laborales de tutela y justicia social permiten atender las situaciones sobrevenidas orientadas a la protección del trabajador en situaciones de necesidad, unido al necesario salvamento de la economía y de la empresa. Sin duda, la empresa se muestra como un instrumento esencial que asegura el empleo presente y futuro. Efectivamente, esta conjunción de objetivos solamente será posible con el buen entendimiento entre los agentes sociales.

Crisis y colectivos especialmente vulnerables desde una perspectiva internacional

La OIT considera que, al menos, entre 8,8 y 35 millones de personas más se encontrarán próximamente en situación de pobreza laboral en todo el mundo. La pandemia del coronavirus no es únicamente una crisis sanitaria, sino que se presenta igualmente como una crisis de carácter social y económica. Efectivamente, el sistema económico se ha mostrado vulnerable ante los efectos de la propagación del virus. Precisamente, una de las prioridades es la atención inminente a los grupos sociales más vulnerables respecto de las consecuencias económicas de la pandemia. La OIT ha abogado por la adopción de medidas urgentes, que se implementen a gran escala y de forma coordinada. Dichas medidas tienen que tener como objetivo esencial la protección de los trabajadores en el trabajo, el fomento de la economía, la defensa del empleo, la conservación de los actuales puestos de trabajo y la garantía de ingresos mínimos de subsistencia. Sin duda, estamos ante un objetivo sumamente ambicioso, que supone la ampliación de la protección y el apoyo decidido al empleo. En concreto, estas soluciones dan lugar a las suspensiones de los contratos de trabajo, las reducciones temporales de jornada, el recurso a las vacaciones pagadas anticipadas y un amplio despliegue de los subsidios económicos para las personas en situación de exclusión social. Todo ello conjugado con el desarrollo de ayudas financieras, así como mecanismos de desgravación fiscal orientados a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas.

El problema es precisamente cuánto tiempo durará esta situación temporal y qué efectos tendrá en nuestra economía y en el mercado de trabajo. En relación a la protección del tejido industrial, y en concreto de las empresas, se muestra especialmente importante el recurso a las políticas fiscales. Estas políticas permiten contener los costes empresariales de forma transitoria, así como afrontar próximamente un programa de inversión pública para generar un ciclo expansivo de creación de actividad económica. En efecto, estas serían medidas adecuadas para evitar la proyección de una temida recesión económica, que sin las medidas públicas precisas daría lugar a una situación prologada de crisis económica en el tiempo.

Pandemia global y pobreza: el aumento de la desigualdad ante la exposición a la crisis

La pandemia ha venido a empeorar la situación de pobreza en muchas capas de la sociedad y generar así nuevas situaciones de exclusión social, derivado de la desigualdad ante la exposición a la crisis. Ciertamente, el combate de la pobreza se manifiesta como un objetivo esencial en un Estado Social y se evidencia ante esta crisis como un obstáculo efectivo a la prosperidad de la sociedad. Sin duda, todo ello va a demandar por parte de nuestros poderes públicos nuevas políticas sociales que intenten revertir la situación en los próximos años. Se necesitan medidas de apoyo social para los más desfavorecidos ante los efectos de la epidemia y sus consecuencias económicas. La OIT recuerda en su informe que el desarrollo de una adecuada política fiscal y monetaria es esencial, fomentando préstamos y auxilios financieros en los sectores sociales más castigados por la crisis.

Principales medidas nacionales en materia laboral y de protección social

Desde el punto de vista de las medias nacionales, se han venido aplicando diversas fórmulas tuitivas para hacer frente a la emergencia sanitaria. Con carácter general, se ha fomentado la protección de la población trabajadora de los riesgos a la salud. De igual modo, se ha favorecido la continuidad de la actividad económica, acompañando la paralización de la economía con una actividad residual esencial. Todo ello supone un efecto descomunal en el mercado de trabajo, en el conjunto de las relaciones laborales y en los mecanismos de protección social. Esta situación demanda una acción ingente de los estados, que deben mostrarse como la pieza primera y esencial de lucha contra la epidemia ante los efectos sociales de la crisis. Se trata de una situación de garantía de contingencias y de prestaciones sociales, que tiene como fin la protección de la vida, la salud y la dignidad humana.

Las medidas laborales básicas se han asegurado mediante la protección del empleo, la estabilidad laboral, la viabilidad del trabajo a distancia, el fomento de nuevas medidas de prevención de riesgos laborales, la protección del salario, la flexibilidad del tiempo de trabajo, el acceso a la protección social en situaciones especiales y la aprobación de nuevos subsidios económicos para las personas más desfavorecidas. Con carácter general, se trata de medidas de diversa intensidad, cuya acción depende de la política desarrollada por los estados. El denominador común ha sido orientar dichas políticas socio-laborales hacia la flexibilidad y la estabilidad laboral en momentos de crisis, permitiendo a las personas mantener sus empleos y, en la medida de lo posible, sus niveles de renta. Son todas medidas provisionales, que intentan conciliar los intereses antagónicos de forma equilibrada. Se ha recurrido a los presupuestos públicos, mediante medidas en muchos casos de carácter asistencial. Sin duda, una de las medidas de protección básicas es el desempleo, aunque se trata de una prestación social que no se encuentra actualmente extendida de forma adecuada en el mundo. En efecto, ello supone un evidente hándicap en muchos países que carecen de esta protección, al ser la primera herramienta de lucha en situaciones de emergencia.

